

Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

D.E.I.P de Barranquilla, cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	08-001-3333-006- 2021-00233-00
Medio de control	Acción de Tutela
Demandantes	Carmen Neida Montiel Jiménez
Demandadas	Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz.

I. Asunto a decidir

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Carmen Neida Montiel Jiménez, quien actúa en nombre propio, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al estimar vulnerado su derecho fundamental de petición.

II. Antecedentes

2.1. Hechos narrados por el Accionante

De la narrativa extensa expuesta por el accionante en el libelo de la demanda de tutela, en el acápite de los hechos, el Despacho se permite extraer los relevantes y sintetizarlos así

- Que solicitó a Colpensiones, la corrección de su historia laboral, por cuanto, no le figuraban muchos períodos que cotizo al Sistema General de Pensiones.
- Que los documentos quedaron registrados en el sistema de correspondencia de Colpensiones con el radicado N° 2021_6911585 del 18 de junio del 2021.
- Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, le entidad contaba con un término no superior a tres meses para dar respuesta a su petición.
- Que hoy, cuando han transcurrido más de tres (3) meses desde que radicó su solicitud, Colpensiones no ha resuelto de fondo su solicitud.
- Que acude al juez, para que ordene al funcionario responsable a cumplir con los términos de Ley, pues la demora en resolver la petición la está perjudicando enormemente, teniendo en cuenta que está próxima a cumplir la edad para radicar los documentos para acceder a la pensión de vejez.

- Que el término de tiempo señalado por Ley para que Colpensiones resolviera los derechos de petición se venció el 19 de septiembre de 2021.

2.2. Pretensiones de la Accionante.

1. Que se ordene al Gerente Nacional de Operaciones de Colpensiones, Dr. César Alberto Méndez Heredia o quien haga sus veces, resuelva la solicitud de corrección de su historia laboral registrada con el radicado N° 2021_6911585 del 18/06/2021.

2.3. Actuación Procesal

La solicitud de tutela fue presentada por correo electrónico ante la Oficina Judicial el día 20 de octubre de 2021. Fue repartida el mismo día a este Despacho. Siendo procedente su admisión, mediante proveído del 21 de octubre de esta misma anualidad se admitió, ordenándose a las entidades accionadas que rindieran los informes que establece el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991¹.

2.4. Informe de entidades accionadas

2.4.1. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

La entidad accionada presentó informe en los siguientes términos:

Que las pretensiones de la acción de tutela no requieren ser objeto de protección, como quiera que la entidad ya atendió de fondo la solicitud presentada por el accionante y que dio lugar a la acción de tutela de la referencia, por lo que ha de considerarse que se configuró un hecho superado en razón a la expedición del Oficio SEM2021-186414 del 25 de junio de 2021.

Así las cosas, debe entenderse que Colpensiones no ha transgredido derecho fundamental alguno, por lo cual la acción de tutela es improcedente al no existir vulneración de derechos fundamentales, y haberse satisfecho por parte de la entidad lo pretendido por el accionante mediante la expedición del Oficio SEM2021-186414 del 25 de junio de 2021, en consecuencia el amparo constitucional ha perdido su razón de ser, y por lo tanto debe declararse la carencia actual de objeto por hecho superado.

¹ Auto notificado a las partes por correo electrónico el 29 de junio de 2021

III. Consideraciones del despacho

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este Juzgado es competente para conocer del amparo invocado, por ocurrir en esta ciudad los hechos que lo motivan al ser el domicilio del accionante, lugar en donde este Juzgado ejerce Jurisdicción Constitucional.

3.2. Problema jurídico que se plantea

En el presente caso, el Juzgado deberá resolver si existió omisión en la respuesta al derecho de petición presentado por la accionante Carmen Neida Montiel Jim, y de encontrarse probada dicha omisión si se vulneraron los derechos fundamentales a la petición, por parte de la entidad accionada Colpensiones.

3.3. Antecedentes Normativos y Jurisprudenciales aplicables al caso

3.3.1. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece la acción de tutela para que toda persona pueda: *“reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

Es decir, se consagra la acción de tutela como un mecanismo a través del cual una persona natural o jurídica, en ejercicio de un derecho preferencial, tiene la potestad de exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales constitucionales cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares en los casos señalados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, siempre y cuando no disponga el actor de otro medio de defensa judicial, salvo que este se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Significa lo anterior, que la acción de tutela es un instrumento de naturaleza subsidiaria o residual a la cual solo puede acudir en ausencia de mecanismos legales para procurar la protección de derechos fundamentales que se reclaman.

En esta oportunidad, nos hallamos frente a la posible violación del derecho de petición de la señora **CARMEN NEIDA MONTIEL JIMENEZ** presuntamente conculcado por la **ADMINISTARDORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, contra quien precisamente procede esta acción.

3.3.2. Del derecho fundamental de petición y su núcleo esencial

Los derechos que ostentan el carácter de fundamentales tienen unas disposiciones constitucionales prioritarias, en atención a que su protección es de vital importancia en el ejercicio de vida de los asociados, el artículo 23 de la constitución política de Colombia ha establecido y desarrolla el derecho de petición como un derecho fundamental al respecto estipula:

“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

De la preceptiva en cita se puede denotar i) que la titularidad del derecho de petición recae en cualquier persona sin distinción de ningún tipo, ii) la respuesta debe ser pronta, es decir, oportuna en aras de garantizar la eficacia y celeridad del derecho reclamado y iii) se puede ejercer tanto ante autoridades de carácter público o privado.

Al respecto la H Corte Constitucional ha establecido:

“Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2). De ahí, que el referido derecho sea un importante instrumento para potenciar los mecanismos de democracia participativa y control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su ejercicio se garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos a la información y a la libertad de expresión. La garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”.

Del anterior análisis jurisprudencial se pueden extraer aspectos que regulan aún más este derecho, entre ellos que no basta con que la autoridad emita una respuesta, pues esta debe ser efectiva y resolver de fondo el asunto planteado, además de reiterar que debe

² Sentencia T -149 de 2013 de 19 de marzo de 2013, M.P Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

ser oportuna en aras de garantizar el derecho de petición incoado y así evitar que las peticiones queden indefinidas en el tiempo.

3.3.3. La regulación normativa del derecho de petición en la Ley 1755 de 2015:

La mencionada normatividad que sustituye a la Ley 1437 de 2011, en lo referente al derecho de petición y desarrolla el artículo 23 constitucional, establece las siguientes disposiciones en cuanto al ejercicio de este derecho

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”.

De la disposición traída a colación se pueden extraer ciertas características de las cuales está dotado este derecho entre ellas que es gratuito, puede ser interpuesto por cualquier persona y ante cualquier autoridad y debe obtener una respuesta oportuna y de fondo a lo solicitado, así mismo en el artículo 14 de la misma norma establece unos términos para resolver las peticiones:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes (...). **Negrita**

“Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales y municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación”.

La Honorable Corte Constitucional, ha precisado, que el ejercicio del derecho de petición, de raigambre fundamental, permite materializar otros derechos constitucionales como el acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política, y que su núcleo esencial consiste en la obtención de una respuesta oportuna, de fondo, clara, precisa y congruente, la cual debe ser notificada al peticionario.

Ha indicado la Corte respecto al derecho de petición lo siguiente:

*“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) **la pronta comunicación** al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”. (Énfasis propio)*

De conformidad con la doctrina constitucional, las reglas básicas que rigen el derecho de petición, tal y como han sido precisadas por la Corte, son:

*“a) **El derecho de petición es fundamental** y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

*c) **La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad; 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.** Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.*

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

- h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
- i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.” (Énfasis propio)

Así mismo, el Alto Tribunal constitucional, con respecto a la respuesta al derecho de petición ha señalado que esta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva, así lo ha sostenido en sentencia T-463/11 señalando lo siguiente:

*“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; **ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorable a los intereses del peticionario;** **iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal contestación al solicitante.***

Si emitida la respuesta por el requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado:

“... el derecho de petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta. Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental.” (Subrayas fuera del texto).

Así, la respuesta de la administración debe resolver de manera precisa y completa, el escrito sometido a su consideración³, además debe ser dada a conocer, por ende, no se tiene satisfecho este derecho cuando la entidad, responde evasivamente o se limita a la simple afirmación, de que el asunto se encuentra en revisión.

La comunicación de la respuesta a la petición se puede dar por diversos medios, siendo normalmente utilizada la notificación por correo certificado; sin embargo, también es permitido que la misma, se haga a través de medios electrónicos o digitales, siempre que el peticionario tenga facilidad de acceso a éstos y así lo acepte.

³ Ver sentencia T -166 de 1996, donde se señaló: “... ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de sostener que el derecho de petición no se ve satisfecho simplemente porque la autoridad ante la cual se eleva la solicitud se limite a responder y menos a acusar recibo, sino que debe producirse una respuesta que guarde relación con lo solicitado, sin que ello implique necesariamente, que ella deba ser favorable; es decir, que el funcionario competente está en la obligación de analizar a fondo la petición para emitir una respuesta que guarde relación directa con lo solicitado en la misma”

Peticiones presentadas ante COLPENSIONES: De otra parte, es preciso tener en cuenta que Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, ha establecido una reglamentación especial en su interior para tramitar las peticiones, quejas y reclamos, que son radicadas ante la entidad, es así como, mediante la Resolución N°. 343 de 2017, estableció términos máximos a fin de dar respuesta a las peticiones de acuerdo al requerimiento, como lo establece en su numeral 8 del artículo 16, el cual señala que el termino para dar respuesta a las peticiones que se refieren a corrección de la historia laboral es de 15 días prorrogables hasta por 30 días.

3.4. Caso concreto

3.4.1. Análisis del caso concreto frente a la vulneración invocada

En el asunto, se encuentra acreditado que la accionante, el 18 de junio de 2021, radicó ante la Administradora Colombiana de Pensiones petición solicitando corrección de su historia laboral, la cual fue radicada bajo el N° 2021_6911585. Pese a lo anterior, presuntamente, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela dicha entidad ha hecho caso omiso a la solicitud elevada por la actora, causando así lesiones en su derecho fundamental de petición. Con fundamento en lo expuesto, la accionante solicita la protección de su derecho fundamental y, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada contestar el derecho de petición elevado, dentro del término más expedito posible.

Por su parte, la entidad accionada rindió informe arrimando copia del oficio radicado SEM2021-186414 de fecha 25 de junio de 2021, en el cual, se da respuesta a la petición elevada por la actora, en la misma, se le comunica que con la información suministrada, no se encontraron registros de pagos a su nombre para los períodos reclamados en las bases de datos, así mismo se le requiere el envío de ciertos documentos allí descritos para continuar con la búsqueda.

No obstante, es menester advertir que junto con el mencionado oficio no se adjuntó constancia de su comunicación u notificación al interesado, razón por la cual no se puede comprobar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Se tiene entonces que, la respuesta brindada por Colpensiones a la petición elevada por la accionante estuvo ajustada a derecho, salvo porque se omitió la debida notificación de dicha respuesta al interesado. En este punto es importante recordar que la respuesta debe cumplir con estos requisitos:

1. oportunidad;

2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado;
3. **Ser puesta en conocimiento del peticionario, si no se cumplen con estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.**

Por las razones anteriores, se concederá parcialmente el amparo y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES proceda a notificar en debida forma la respuesta que brindó el 25 de junio de 2021 al derecho de petición de la señora Carmen Neida Montiel Jiménez. La notificación de dicha respuesta se deberá realizar tanto en el email indicado por la actora en la petición, como en el email indicado en la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Barranquilla, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR, el derecho fundamental a la petición demandado por la señora Carmen Neida Montiel Jiménez, de conformidad a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia inmediata de lo anterior, se **ORDENA** a la entidad accionada, que dentro del término de (48) horas, siguientes a la notificación de esta decisión, ponga en conocimiento de la peticionaria la respuesta de fecha 25 de junio de 2021, dada a la petición elevada por ésta el 18 de junio de esta misma anualidad.

La notificación de dicha respuesta se deberá realizar tanto en el email indicado por la actora en la petición, como en el email señalado en esta acción de tutela.

TERCERO: Notifíquese el presente proveído por el medio más expedito a las partes, y a la Defensoría del Pueblo.

CUARTO: Si no fuere impugnada la presente decisión, por Secretaría, REMÍTASE la presente actuación a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término señalado en el Artículo 31 del Decreto N.º 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ

Jueza
L.P.M

Dirección Calle 38 No. 44-61 Edificio Antiguo Telecom piso 1º.
PBX 3885005 extensión 2070 www.ramajudicial.gov.co
Email Adm06bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico - Colombia



Radicado No. 08001-3333-006-2021-00233-00
Medio de control: Acción de Tutela
Demandante: Carmen Neida Montiel Jiménez
Demandada: Colpensiones

Firmado Por:

Lilia Yaneth Alvarez Quiroz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Contencioso 006 Administrativa
Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6463f7ef45b48abb6e2cb20a9796294fca0740dcc87b13fc901fe17011d51b97**

Documento generado en 04/11/2021 06:45:32 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Dirección Calle 38 No. 44-61 Edificio Antiguo Telecom piso 1°.
PBX 3885005 extensión 2070 www.ramajudicial.gov.co
Email Adm06bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico - Colombia

